



CAUSA EJECUTORIA - ARCHIVO

38507/2018 JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

38508/2018 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 803/2018, PROMOVIDO POR NEUEWA WAL-MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL ACUERDO QUE A LA LETRA ESTABLECE:

Ciudad de México; doce de septiembre de dos mil dieciocho.

Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, dentro del plazo de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución en la que en su único punto resolutivo se determinó sobreseer el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA.

Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo dejar por cuerda separada los cuadernos incidentales.

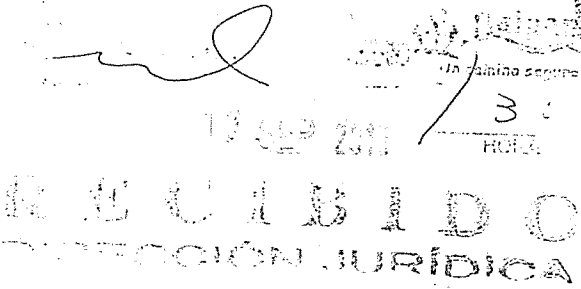
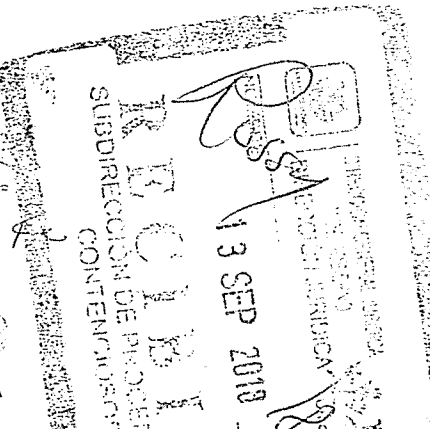
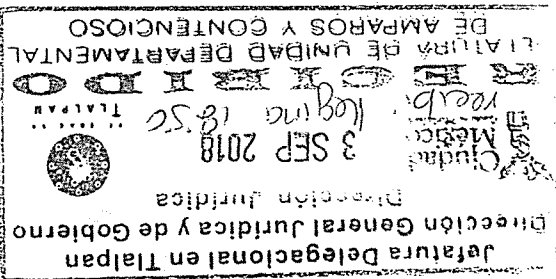
En la inteligencia de que en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracciones II y III, última parte, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, tanto el expediente principal como el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, serán susceptibles de destrucción, en razón de que este Tribunal juzgado determina que no contienen valor jurídico o histórico por el cual se deban conservar.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, incluyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el presente expediente, al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales procedentes.

Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente juicio, en la inteligencia de que los documentos que obran agregados en original, de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General, se ponen a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que lo recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, serán destruidos, al realizarse la depuración de las constancias que integran el juicio principal en que se actúa, con excepción de las detalladas en los párrafos que anteceden, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del mencionado Acuerdo General.

En ese sentido, se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia.



4AKAXNA*

Finalmente, se levanta la reserva contenida en proveído del diez de septiembre de dos mil dieciocho (foja 559), respecto del desistimiento formulado por la parte quejosa en su escrito registrado bajo el folio 16623 (foja 557 y 558); al respecto, no ha lugar a dictar mayor proveído en razón de lo acordado en párrafos precedentes.

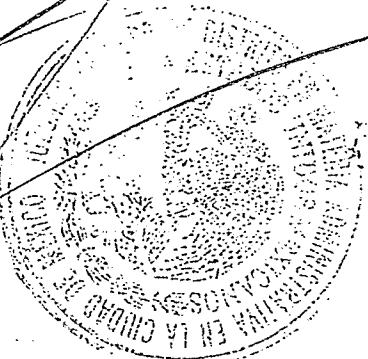
NOTIFIQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Así lo proveyó y firma Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Damián Dávila Ocadiz, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. **YRS**

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos conducentes.

**EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

DAMIÁN DÁVILA OCADIZ





cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está sufriendo sus efectos, ni los sufrirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal”.

De la jurisprudencia invocada se advierte que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.

Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso.

En efecto, del análisis conjunto de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella.

De ahí que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de garantías.

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente:

- a. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra.
 - b. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.
 - c. O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo.
- En ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama, entre otros, la omisión de dar respuesta al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el expediente TLP/DJ/SVR/NA-PC/093/2018, mediante el cual la parte quejosa presentó copia certificada de la autorización del programa interno de protección civil así como manifestaciones en relación al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de protección civil, solicitando el archivo del expediente como asunto concluido.

En ese sentido, es dable destacar que de acuerdo con las constancias certificadas que obran en autos, las cuales gozan de pleno valor probatorio en razón de su modo de reproducción de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, párrafo segundo, se aprecia que la responsable **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, mediante acuerdo del quince de junio de dos mil dieciocho, acordó las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito formulado el trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual esencialmente determinó que la parte quejosa dio cumplimiento a lo establecido en los resolutivos primero y segundo de la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (cubrir la multa impuesta en su contra por el monto de doscientas veces el valor de la unidad de cuenta de la Ciudad de México, y acreditar que cuenta con el

programa de protección civil vigente); acuerdo que se aprecia no fue notificado a la parte quejosa.

En ese sentido, no obstante, si bien antes de presentarse el escrito inicial de demanda se emitió la respuesta a dicho escrito, mediante acuerdo del quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente TLP/DJSVRVA-PC/093/2018, pero no su notificación; lo cierto es que durante la tramitación del presente juicio de amparo le fue notificado dicho acuerdo a la parte quejosa mediante este órgano jurisdiccional, documental con la que incluso se le dio vista personal mediante auto del siete de agosto de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya presentado manifestación alguna ante este órgano jurisdiccional; derecho que se declaró precluido en términos de la audiencia constitucional del presente sumario.

Por tanto, si la autoridad responsable emitió la repuesta al escrito de la parte quejosa presentado el trece de junio de dos mil dieciocho, a través del acuerdo del quince de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente TLP/DJSVRVA-PC/093/2018; por lo que el efecto de la omisión reclamada dentro de dicho procedimiento cesó, de manera tal como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada en su contra; de ahí que con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de dicha omisión.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo en consulta, así como los demás relativos y aplicables, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio en términos de lo expuesto en el considerando Cuarto de la presente sentencia.

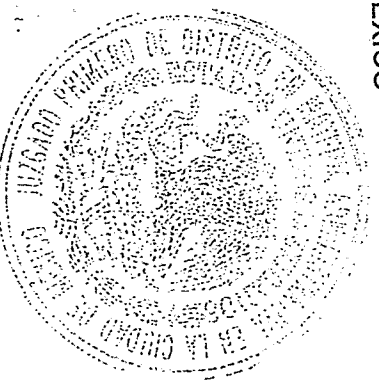
NOTIFIQUESE.

Así lo resolvió y firma Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Laura Violeta Rodríguez Rodríguez, quien autoriza y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe."

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos conducentes.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

LAURA VIOLETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ





materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el artículo 100 mencionado señala que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada; la cual tiene intrínsecamente efectos restitutorios, al prever que se evitará que se ejecute o que se continúe la ejecución ya iniciada, pues precisamente esos efectos implican, acorde con la naturaleza del acto, evitar o detener la ejecución de algún acto a fin de que el quejoso siga disfrutando del derecho que le ha sido violado con el acto impugnado. Además si el artículo 101 referido dispone que el Magistrado instructor podrá acordar la suspensión el acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes, con ello se advierte que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios, para lo cual, como en el juicio de amparo, habrá de atenderse a la naturaleza jurídica de los actos y sus efectos para determinar cuándo procede conceder la providencia con esos alcances. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, pues ambas legislaciones tienen los mismos alcances al conceder la suspensión de los actos cuestionados”.

Bajo esa circunstancia, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclaman la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia constitucional, pues no opera excepción alguna a esa institución jurídica.

Por lo que toca a las restantes excepciones al principio de definitividad, se aprecia:

⌘ Como se demostró en líneas arriba, el medio ordinario de defensa se encuentra previsto en una ley y no en un reglamento.

⌘ El acto reclamado, no carece de fundamentación y motivación ya que de su lectura se desprende que fue emitido con base en diferentes disposiciones como son los artículos 14 y 16 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; entre otros; además, de que la responsable dio razones, para resolver en el sentido que lo hizo, de este modo se demuestra que la autoridad administrativa no omitió fundar y motivar su determinación; sin embargo, si lo que en todo caso pretendía impugnar la quejosa era la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado debió de hacerlo valer ante un tribunal ordinario.

⌘ A la promovente no le asiste el carácter de tercero extraño, pues, se advierte que tuvo conocimiento de diversos actos realizados en el procedimiento administrativo como es la orden de visita de verificación de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el levantamiento del acta de visita de verificación del veintiséis de febrero siguiente, aunado a que compareció a dicho procedimiento mediante diversos escritos, a través del diverso de nueve de marzo de dos mil dieciocho mediante el cual exhibió documentación ante la responsable; el siete de junio de dos mil dieciocho mediante el cual

exhibió el pago de la multa impuesta; y el diverso de trece de junio de dos mil dieciocho mediante el cual exhibió el programa interno de protección civil, lo que evidencia que tuvo conocimiento del procedimiento administrativo incoado en su contra.

⌘ No obstante que la quejosa pretende hacer valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución, al argumentar que el acto reclamado no está fundado y motivado y que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; lo cierto es que, no se actualiza esta excepción, en razón de que esas manifestaciones son tendentes a demostrar que se ubica en diversos supuestos de excepción, como lo es que el acto reclamado carecía de fundamentación y motivación, lo cual ya fue desvirtuado.

⌘ No se reclama resolución alguna que conlleve violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal y 19 y 20 de la Constitución Federal, toda vez que la resolución reclamada es de naturaleza administrativa.

⌘ Adicional a lo expuesto, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

⌘ No se está en presencia de un amparo contra leyes; no obstante haber sido señalado como acto reclamado el artículo 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), toda vez que en el anterior apartado se decretó el sobreseimiento respecto de tal ordenamiento jurídico, al no haber sido reclamado con motivo del primer acto de aplicación sino de uno posterior del cual fue desvinculado.

En razón de lo hasta aquí expuesto, resulta que al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, la sociedad quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, previamente a acudir a esta instancia constitucional.

Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento, respecto del acto de la autoridad que quedó precisado en párrafos que anteceden.

Por otra parte, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el expediente TLP/DJSVRVA-PC/093/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al resultar improcedente el juicio de amparo, ya que dichas actuación cesó sus efectos, pues la autoridad responsable dio respuesta al escrito cuya omisión se reclama.

Para avalar tal aserto, resulta necesario tomar en consideración lo que establece el precepto legal en cita, cuyo texto es del tenor siguiente:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

De la lectura del supuesto normativo transcrito, es posible advertir que si los efectos del acto reclamado cesan, el juicio de amparo es improcedente.

Sine de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común, tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la



Por otra parte, el artículo 108 de la *Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México* dispone lo siguiente:

“Artículo 108. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección interponer el recurso de inconstitucional previsto en esta Ley o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal. El recurso de inconstitucional tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido.”

Por otra parte los artículos 3, fracción I, y 31, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, disponen:

“Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

[....]”

“Artículo 31. Las Salas Jurisdiccionales son competentes para conocer:

I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México; las alcaldías, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

[....]”

Los numerales citados, establecen la procedencia del recurso de inconstitucional y del juicio de nulidad, de manera optativa en contra de actos de las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que causen agravio a una persona física o moral.

Por otra parte, cabe destacar de conformidad con el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,⁸ ahora

cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.”

⁸ Artículo 2o.- La Administración Pública de la Ciudad de México será Central, Desconcentrada y Paraestatal.

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los

Ciudad de México, ésta se divide en Central, Desconcentrada y Paraestatal, y las Secretarías que la integran, forman parte de la Administración Pública Centralizada.

Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que la autoridad responsable de la emisión de la resolución reclamada pertenece a la administración pública de la Ciudad de México, la cual puede ocasionar con sus actos un agravio tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, como en la especie acontece.

Fijadas las premisas anteriores, es de hacer referencia al asunto concreto, en que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEM/C/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVR/A-PC/093/2018, a través de la cual se le impuso una multa por infringir lo establecido en los numerales 89 y 90 de la Ley de Protección Civil al no haber contado con el programa de protección civil y en la que se ordenó el estado de clausura del establecimiento mercantil con giro de tienda de autoservicio denominado [REDACTED]

[REDACTED] d de México, acto que atribuye al Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, de lo que se sigue, que la actuación referida fue emitida y realizada por una autoridad perteneciente a la Administración Pública de la Ciudad de México.

En ese sentido, tal resolución debe ser impugnada mediante el juicio de nulidad, en términos de los artículos 3, fracción I, y 31, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, o bien del recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia.

Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, haya advertido alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional.

Lo anterior es así, habida cuenta de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados, en términos de los artículos 61, 71, 72 y 73, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la suspensión definitiva de los actos, y sin prever un plazo mayor para su otorgamiento.

Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.I.A. J/112 A (10a.),⁹ sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que sostuvo que la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como la Ley de Amparo, prevén los mismos alcances al otorgar la suspensión del acto, ya sea impugnado o reclamado, tal como se detalla a continuación:

“SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVEN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD. De la interpretación finalista de los artículos 147 de la Ley de Amparo, así como 100 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que ambas legislaciones prevén, respectivamente, los mismos alcances al otorgar la suspensión del acto controvertido, pues mientras el artículo 147 indicado establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y

que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que este determine.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal.

⁹ Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Jurisprudencia PC.I.A. J/112 A (10a.), Plenos de Circuito, publicada el viernes veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con registro 20151177.



En esas circunstancias, deben desvincularse los actos legislativos reclamados del acto de aplicación que también reclama el quejoso, el cual refiere ser la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRVA-PC/093/2018, emitido por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, debido a que ésta no constituye el primero en que se aplicó la norma en su perjuicio, es decir, cuando por primera vez se ordenó y practicó la orden de visita de verificación en el establecimiento defendido por la quejosa.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la otra Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 247, cuyo rubro y texto son:

“LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACION. Cuando existen dos o más juicios promovidos en contra de iguales leyes, de carácter sustantivo y heteroaplicativas y son reclamadas por motivos análogos, solamente es procedente respecto de la ley, el juicio en que se reclama el primer acto específico de individualización de la misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracciones VI, XII, y 74, fracción I de la Ley de Amparo. En efecto, la connotación primer acto de aplicación que le causa un perjuicio al quejoso, a que aluden los preceptos referidos, es la oportunidad para reclamar por una sola vez, la constitucionalidad de la ley, el juicio que se promueva en contra del segundo o ulteriores actos de aplicación resulta improcedente en relación a la misma, porque respecto a quien obtuvo la protección constitucional en un amparo contra leyes, el efecto inmediato es nulificar la validez jurídica de la ley respecto al propio quejoso. Esta interpretación es la idónea para evitar la litispendencia, la contradicción de sentencias y especialmente obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían resultar vulneradas si se promovieran tantos juicios como actos de aplicación existan.”

Por ende, es dable concluir que el acto por el cual se ordenó la práctica de la visita de verificación administrativa en el establecimiento mercantil con giro de tienda de autoservicio denominado “Superama Jardines de la Montaña 2830” ubicado en Boulevard Picacho Ajusco, número 8, colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, la cual se llevó a cabo el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, constituye el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), pues con fundamento en dicho numeral fue ordenada la citada diligencia; no así la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRVA-PC/093/2018, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto del acto legislativo que dio origen a las normas reclamadas; en consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Ahora, al quedar desvinculadas las normas de carácter general reclamadas del supuesto acto de aplicación también reclamado, esto es, de la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRVA-PC/093/2018, se analizará si respecto de este procede el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.

Como se ha dado noticia, la parte quejosa impugna la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, de referencia, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, a través de la cual se le impuso una multa por infringir lo establecido en los numerales 89 y 90 de la Ley de Protección Civil al no haber contado con el programa de protección civil y en la que se ordenó el estado de clausura del establecimiento mercantil con giro de tienda de autoservicio denominado “Superama Jardines de la Montaña 2830” ubicado en Boulevard Picacho Ajusco, número 8, colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México [clausura que incluso no fue ejecutada, dado que la parte quejosa cubrió la multa impuesta].

En ese sentido, este juzgado de distrito, advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX,

primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no cumplimentó el principio de definitividad, ya que debió interponer el recurso de inconformidad, o bien, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Para demostrar tal aserto, es dable destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)"

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior, (...)."

La norma trascrita regula el principio de definitividad, pues, establece la procedencia del amparo indirecto respecto de actos materialmente administrativos provenientes de autoridades distintas a los tribunales siempre que no sean reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que la Ley de Amparo requiera como condición para decretar esa medida cautelar.

Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, aun sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente.

Tal principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos, por lo que, previo a promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos.

El reconocimiento constitucional del principio en comento responde, entre otras cuestiones, a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el gobernado que su promoción y la consecuente activación del control de la regularidad constitucionalidad encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija.

Tal principio no es absoluto, porque admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados para hacerla.⁷

⁷ Resulta ilustrativa la tesis 2a. LV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, Tomo XII, julio de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del



Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

- a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;
- b) Las leyes federales;
- c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
- d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
- e) Los reglamentos federales;
- f) Los reglamentos locales; y
- g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

(...).”

De las hipótesis de improcedencia trascritas se advierte que las normas generales se pueden impugnar, a través del juicio de amparo, en distintos momentos, según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable, que concrete la aplicación al particular de la disposición impugnada.

En el primer caso, se trata de normas autoaplicativas cuya característica esencial implica que con su sola entrada en vigor inciden en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones jurídicas. En esta hipótesis, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que prevé la disposición, para que afecte su interés jurídico y, por ende, se encuentre legitimado para impugnarla a través del juicio de amparo.

En el segundo supuesto, se trata de normas heteroaplicativas, que son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, para que incidan en la esfera jurídica del gobernado, de esa forma las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles hasta en tanto se realice tal condición, la que puede consistir en la realización de un acto jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le fija consecuencias jurídicas, ya sea que se realice por una autoridad judicial, administrativa o legislativa, o bien, por un particular, el propio quejoso o un tercero. En este supuesto, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa.

Además también se desprende que tratándose de leyes impugnadas con motivo de su primer acto de aplicación, se requiere la realización precisamente de ese acto de materialización que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa que genere un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, las cuales pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al del primer acto de aplicación, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia.

Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de la primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones.

En armonía con lo expuesto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen:

“Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitabile, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incommunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro,

desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

De las disposiciones transcritas deriva que el plazo genérico para la presentación de la solicitud de amparo es de quince días, y las propias normas establecen excepciones en materia de normas generales heteroaplicativas; procesos penales en hipótesis específicas; derechos agrarios, y en los casos que importen peligro de privación de la vida, entre otras.

Asimismo, en el artículo 18 citado, el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de garantías, determinando tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca del juicio.

Ahora bien, en la especie, la parte quejosa tilda de inconstitucional el numeral 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo primer acto de aplicación, afirma, aconteció mediante la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLPDJ/SVRVA-PC/093/2018, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**.

Cabe destacar que para la emisión de la resolución reclamada la autoridad **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan** fundó su competencia, entre otros numerales, en términos de lo establecido en el artículo 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que dicha norma establece lo siguiente:

"Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno:

(...)"
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal;

(...)." Como se aprecia, la norma que se tilda de inconstitucional establece que dentro de las atribuciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de las Delegaciones de la Ciudad de México, se encuentra la referente a emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, por lo que establecen el ámbito de actuación de los Directores Jurídicos y de Gobierno de cada Delegación que conforma a la Ciudad de México.

Asimismo, cabe destacar que en la resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLPDJ/SVRVA-PC/093/2018 [acto reclamado en la presente instancia constitucional], la autoridad **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan** determinó calificar la validez del acta de verificación administrativa practicada por el Personal Especializado en funciones de Verificación, mediante orden de visita de verificación del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.

No obstante, el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que la parte quejosa tilda de inconstitucional, lo constituye la orden de visita de verificación del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, correspondiente al expediente TLPDJ/SVRVA-PC/093/2018 (acto no reclamado en el presente juicio), mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° fracción III, 122 fracción I, 122, Bis fracción XIV, inciso A) y 124, fracciones III, IV, V y XXII, del **Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal** (ahora Ciudad de México), entre otros, se ordenó la práctica de una visita de verificación en el establecimiento mercantil con giro de tienda de autoservicio denominado "Superama Jardines de la Montaña 2830" ubicado en Boulevard Picacho Ajusco, número 8, colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, inmueble que por esta vía se defiende; la cual se llevó a cabo el veintiséis de febrero siguiente, en la que se asentó, entre otras cuestiones, que no se exhibió programa de programa de protección civil.



Autoridades responsables (todas dependientes del Gobierno de la Ciudad de México)		Actos reclamados	
1. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.	a)	Expedición del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, específicamente su artículo 124, fracción V, como norma heteroaplicativa.	
2. Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan.	b)	La resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRNA-PC/093/2018.	
	c)	La omisión de dar respuesta al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el expediente TLP/DJ/SVRNA-PC/093/2018.	

TERCERO. Existencia de los actos reclamados.³ Precisos los actos reclamados en el presente juicio de amparo y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse al respecto.

Es cierto el acto reclamado del **Jefe de Gobierno de la Ciudad de México** consistente en la expedición del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, específicamente su artículo 124, fracción V, como norma heteroaplicativa, toda vez que la notoria existencia de ese tipo de actos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.⁴

Asimismo, son ciertos los actos reclamados de la autoridad **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, consistentes en:

- La resolución administrativa del veinticinco de abril de dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRNA-PC/093/2018.
- La omisión de dar respuesta al escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, en el expediente TLP/DJ/SVRNA-PC/093/2018.

Toda vez que, aun y cuando dicha autoridad negó la existencia de la resolución que la parte quejosa le imputa, también lo es que de las constancias que obran en autos en copia certificada, las cuales constituyen documentales públicas que adquieren eficacia y valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se advierte que dicha autoridad emitió el acto que la parte quejosa le imputa,⁵ consistente en la resolución administrativa del veinticinco de abril de

Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

³ Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, registro 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO".

⁴ Y atento al criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN", así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 65, primera parte, página 15, de rubro "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA".

⁵ En apoyo a lo anterior, es aplicable la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Junio de mil novecientos noventa, en la página 588, Tomo V, Segunda Parte-2, Octava Época, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFFICIENTES PARA APOYARLO". La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que

dos mil dieciocho contenida en el oficio JUDEM/C/1684/2018, correspondiente al expediente TLP/DJ/SVRVA-PC/093/2018.

Por otra parte, es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable consistente en la falta de acuerdo al escrito del de trece de junio de dos mil dieciocho, en el expediente TLP/DJ/SVRVA-PC/093/2018, pues de constancias de autos se aprecia, que si bien, mediante diverso proveído del quince de junio de dos mil dieciocho la autoridad responsable **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan** dio respuesta a dicho escrito, también lo es que no se aprecia que este se haya notificado personalmente a la parte quejosa, por lo que dicha omisión resulta cierta.

CUARTO. Causas de improcedencia advertidas de oficio. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.⁶

En ese sentido, si bien por regla general, en el amparo indirecto no debe desvincularse la norma reclamada de su acto de aplicación, tal regla admite una excepción cuando de la revisión de constancias se advierta que no se trata del primer acto aplicado en perjuicio del quejoso, sino de uno posterior.

Acorde con lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el artículo 124, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, como norma heteroaplicativa; el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que no resulta ser el primer acto de aplicación de la norma impugnada, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con la diversa XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como con el numeral 107, fracción I.

Con la finalidad de demostrar tal aserto, resulta indispensable destacar que el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Ley de Amparo establecen:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnada en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estar-se a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.”

“Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos.

⁶ Sirve de apoyo, la jurisprudencia número ochocientos catorce, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que es del tenor siguiente: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”.

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

- a) El Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- b) El C. Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan.

IV. ACTOS RECLAMADOS

- 1. Del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal se reclama la expedición del Reglamento Interior de la Administración Pública, concretamente el artículo 124, fracción V que se transcribe a continuación:

(...)

- 2. Del C. Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan se reclama lo siguiente:

i. La resolución administrativa de 25 de abril de 2018,

contenida en el oficio JUDEMC/1684/2018 y emitida dentro del expediente TLP/DJSVR/A-

PC/093/2018, a través de la cual le impuso a

NUEVA WAL-MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE

C.V. una multa en cantidad equivalente a 200 veces

el valor de la unidad de cuenta de la Ciudad de

México, y determinó el estado de clausura del

establecimiento mercantil ubicado en Boulevard

Picacho Ajusco número 8, Colonia Jardines de la

Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, y

ii. La omisión en dar respuesta al escrito promovido por

NUEVA WAL-MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE

C.V. el 13 de junio de 2018, dentro del expediente

TLP/DJSVR/A-PC/093/2018, y tener el asunto

como total y definitivamente concluido."

SEGUNDO. Prevención de demanda. Por acuerdo del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el expediente 803/2018 y previno a la quejosa a fin de que precisara los actos reclamados:

TERCERO. Desahogo de prevención y admisión de demanda.

Por escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la parte quejosa desahogó favorablemente la prevención formulada por este Juzgado de Distrito, por lo que en proveído del doce de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo.

CUARTO. Vista con documentales. Mediante proveído del siete de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la existencia del acuerdo del quince de junio de dos mil dieciocho emitido por la responsable Director Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan; derecho que se declaró precluido en términos del acta de audiencia que antecede.

QUINTO. Celebración de la audiencia constitucional. De ese modo, una vez integrado el presente asunto, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente asunto,¹ en virtud de que se reclaman actos de autoridades administrativas, con residencia en el territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados.² Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama:

¹ Lo anterior de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

² Precisión que se formula con apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, registro 192097, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

También es de observarse la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su



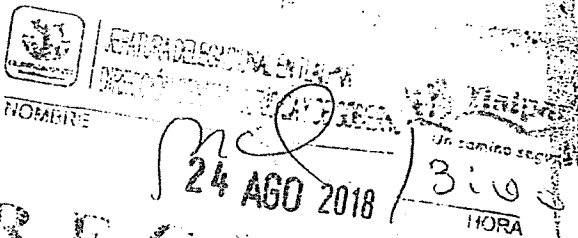
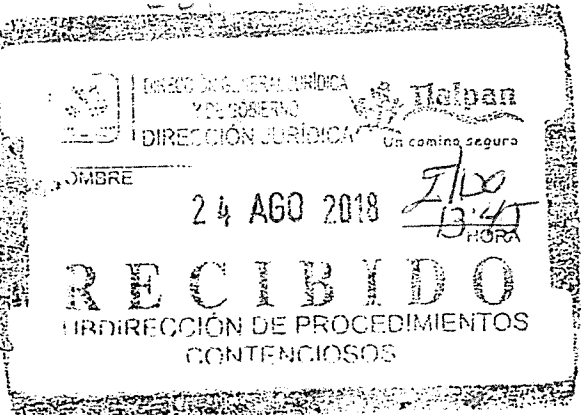
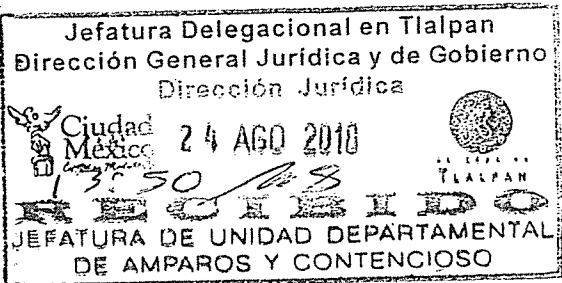
SENTENCIA

35899/2018 JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

35900/2018 DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

35901/2018 MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO (MINISTERIO PÚBLICO)

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 803/2018, PROMOVIDO POR NUOVA WAL-MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., CON ESTA FECHA SE DICTÓ LA SENTENCIA QUE A LA LETRA ESTABLECE:



"En la Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, estando en audiencia pública Gabriel Regis López, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la secretaria Laura Violeta Rodríguez Rodríguez, con quien actúa y da fe, como está ordenado en auto del ocho de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la *audiencia constitucional* relativa al juicio de amparo 803/2018, sin la asistencia de las partes; al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para todos los efectos a que haya lugar; asimismo, *CERTIFICA*: que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído del siete de agosto de dos mil dieciocho, respecto de la vista dada con el acuerdo del quince de junio de dos mil dieciocho emitido por la responsable Director Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan, transcurrió del diez al catorce de agosto de dos mil dieciocho, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos; atento a lo anterior, el Juez acuerda: toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, a pesar de encontrarse debidamente notificada según se precisó en líneas anteriores; en tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluido su derecho para hacerlo; por ende, el presente juicio de amparo será resuelto conforme a las constancias que obren en autos. Enseguida, se declara abierto el período de pruebas, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza las *documentales* que obran en autos; así como la *instrumental de actuaciones* y la *presuncional* en su doble aspecto, legal humana; sin más pruebas pendientes por desahogar, se da por concluido este período. A continuación, procede abrir la fase de alegatos, en la que la *señoría* hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no presentó *pedimento*; al respecto, el Juez acuerda: se declara precluido el derecho de las partes para formularlos, así como el de la aludida agente para presentar *pedimento*; dándose por concluida esta etapa de la presente audiencia, se procede al dictado de la resolución correspondiente, al tenor siguiente:

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 803/2018, promovido por Rodrigo Martínez Serrano, apoderado de la persona jurídica Nueva Wal-Mart de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en contra de actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado a este Juzgado de Distrito, Rodrigo Martínez Serrano, apoderado de la persona jurídica Nueva Wal-Mart de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: